



## Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5)

La presente obra está bajo una licencia:

**Atribución-SinDerivadas 2.5 Colombia (CC BY-ND 2.5)**

Para leer el texto completo de la licencia, visita:

<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/2.5/co/>

### Usted es libre de:



Compartir - copiar, distribuir, ejecutar y comunicar públicamente la obra

hacer un uso comercial de esta obra

### Bajo las condiciones siguientes:



**Atribución** — Debe reconocer los créditos de la obra de la manera especificada por el autor o el licenciante (pero no de una manera que sugiera que tiene su apoyo o que apoyan el uso que hace de su obra).



**Sin Obras Derivadas** — No se puede alterar, transformar o generar una obra derivada a partir de esta obra.

**Incidente de reparación integral: Un dialogo entre el derecho penal y la  
responsabilidad civil extracontractual en casos de conductores en estado de  
embriaguez**

---

**Comprehensive reparation incident: A dialogue between criminal law and tort  
liability in cases of drunk drivers.**

**Daniela Sanabria Castillo\***  
**Universidad Católica de Colombia**

**RESUMEN**

La reparación integral a las víctimas de accidentes de tránsito cuando se trata de la conducción en estado de embriaguez, ha derivado en dos figuras jurídicas que permiten analizar la pertinencia y materialización efectiva de este principio. De un lado el incidente de reparación integral incorporado en el Derecho Penal colombiano y de otro, la responsabilidad civil extracontractual que presuponen un fundamento jurídico suficiente para cuestionar la pertinencia y efectividad de aquellas figuras que, como dos elementos jurídicos suficientes y correlacionados, sirven como fundamento en el análisis y solución a las controversias jurídicas derivadas de la aplicación de la Ley.

De este modo, este es un análisis de la fundamentación jurídica que existe en el abordaje de los accidentes de tránsito en Bogotá desde una investigación descriptiva con enfoque central en el Derecho Penal hacía la búsqueda de un concepto claro y unificado sobre la reparación integral y la responsabilidad civil extracontractual, como mecanismos garantes de la compensación a los daños causados en accidentes de tránsito.

**PALABRAS CLAVE**

---

\* Estudiante de derecho Universidad Católica de Colombia, articulo para optar por el título de abogada, correo electrónico Bogotá D.C. [dsanabria39@ucatolica.edu.co](mailto:dsanabria39@ucatolica.edu.co) – Código estudiantil: 2111239

Reparación integral, Colombia, Estado de Embriaguez, Accidente de tránsito, Derecho penal.

## **ABSTRACT**

Comprehensive reparation to victims of traffic accidents when it comes to drunk driving has resulted in two legal figures that allow us to analyze the relevance and effective implementation of this principle. On the one hand, the comprehensive reparation incident incorporated in Colombian Criminal Law and on the other, non-contractual civil liability, presupposes a sufficient legal basis to question the relevance and modification of the figures that, as two necessary and correlated legal elements, serve as foundation in the analysis and solution to the legal controversies derived from the application of the Law.

In this way, this is an analysis of the legal basis that exists in the approach to traffic accidents in Bogotá from a descriptive investigation with a central focus on Criminal Law, searching for a clear and unified concept of comprehensive reparation and Non-contractual civil liability as guarantee mechanisms for compensation for damages caused in traffic accidents.

## **KEY WORDS**

Comprehensive reparation, Colombia, State of Drunkenness, Traffic accident, Criminal law.

## **SUMARIO**

Introducción. 1. Antecedentes Históricos. 2. Elementos Metodológicos. 3. Contextualización Jurídica. 4. Línea Jurisprudencial. 4.1. Análisis de resultados 5. Análisis jurisprudencial. Conclusiones. Lista de referencias.

## **INTRODUCCIÓN**

La pretensión principal de la investigación, atendiendo al objetivo y pregunta problema, que se buscó reconocer si ¿Es eficaz y eficiente el Incidente de reparación integral en la justicia penal colombiana desde la perspectiva de los conductores en estado de embriaguez en Bogotá? partiendo desde focalizar la comprensión del incidente de reparación integral a víctimas de accidentes de tránsito, en el marco del proceso penal y la acción de

responsabilidad civil, como mecanismo idóneo en la indemnización al sujeto pasivo del delito.

Lo anterior, luego de identificar que los índices de accidentalidad por estado de embriaguez en Colombia demuestran la necesidad de indagación en el tema dentro del sistema penal colombiano, desde su inclusión desde el 2004 y en correspondencia con la acción de responsabilidad civil extracontractual como dos escenarios jurídicos que obedecen a procedimientos y momentos procesales diferentes y que pueden llegar a ser tan complementarios como antagónicos en el análisis y resolución de controversias jurídicas, desde una fundamentación metodológica con enfoque descriptivo, en la elaboración de una línea jurisprudencial que permite analizar estableciendo puntos de relación a las variables de estudio y las principales distinciones y aportes realizados por el órgano constitucional.

En este sentido, resaltar la pertinencia de la investigación que permite a posteriori fijar si existe efectividad y eficiencia de este procedimiento vs el proceso de responsabilidad civil extracontractual como parte fundamental de la reparación al daño de la víctima, teniendo en cuenta que el objetivo general se basó en Analizar la eficacia y eficiencia del incidente de reparación integral a víctimas de accidentes de tránsito en Bogotá desde la justicia penal colombiana en el caso de los conductores en estado de embriaguez.

En consecuencia, definir que el propósito discursivo nace desde la introspección del incidente de reparación integral en el marco de acción civil de responsabilidad extracontractual en la configuración de un sistema jurídico solvente que permita una acceso eficaz y eficiente a las víctimas desde la propuesta de concentración de criterios procesales y/o mecanismos.

Con fundamento en lo anterior, esta investigación es fruto de analizar la ambivalencia existente entre la materialización y fin del incidente de reparación integral a víctimas de accidentes de tránsito donde ha mediado estado de embriaguez en los conductores; en consideración a la estrecha línea de comprensión dentro de los conceptos de materialización eficiente y eficaz del incidente de reparación integral en el Derecho Penal y la acción Civil, por cuanto, analizar la pertinencia social de esta institución jurídica, permite comprender si el incidente de reparación integral asegura a la víctima la potestad de conseguir una respuesta que persiga el resarcimiento al daño causado, aun cuando uno de sus presupuestos es el

agotamiento de las instancia del proceso penal, sin menoscabo a que en el proceso de responsabilidad civil extracontractual, no medie tiempo o definición de acción penal adelantada como requisito.

De modo que, este escrito propone es una respuesta discursiva y critica a una situación jurídica, que se ha materializado desde la reforma penal de 2004 y las consideraciones existentes entre la aplicación del incidente de reparación integral o la responsabilidad civil extracontractual, bien sea como acciones que persiguen un mismo fin, desde enfoques y procedimientos diversos; sumado a que en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Colombia se ha hecho diverso tratamiento al incidente de reparación integral en otras esferas sociales, como el conflicto armado, entre otros, pero el análisis de accidentes de tránsito donde ha mediado estado de embriaguez es un aporte importante y pertinente en aras de la construcción académica y el aporte significativo a la institución.

Finalmente, el presente trabajo de investigación pretende realizar un análisis documental de la jurisprudencia de la Corte Constitucional con respecto a la incidencia la acción civil de responsabilidad extracontractual como fundamento o no del incidente de reparación integral en el proceso penal de accidentes de tránsito; análisis que se genera a partir de la utilización de los conceptos socio-jurídicos.

## **1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS**

El incidente de reparación integral a víctimas halla su fundamento jurídico principal en la Ley 906 de 2004 que crea un nuevo sistema penal acusatorio y lo incorpora mediante el Art. 102, como fundamento en los principios de la responsabilidad civil extracontractual y la oportunidad que tiene la víctima de acceder a una compensación económica efectiva, teniendo en cuenta que en el

contexto jurídico goza de una fuerza de cohesión realmente innegable. El legislador, los jueces y la doctrina, aun reconociendo la indeterminación y vaguedad que implica su adaptación a los casos concretos, recurren a ella para dar solidez a sus argumentos y para expresar [...] la justicia a través del derecho. (Sandoval. 2013, p. 242).

En este sentido, el incidente de reparación integral ha servido como fundamento suficiente y principio dentro de los criterios de determinación de la integralidad de la

compensación al daño, siendo objeto de diverso tratamiento, donde puede resaltarse que la Corte Constitucional en sentencia C-250 de 2011 destaca el papel que tienen las víctimas dentro del sistema penal, y donde subyace “de conformidad con las legislaciones penal y civil [que] los afectados con la conducta punible tienen derecho a reclamar y obtener la reparación o compensación debida por los daños causados” (Corte Suprema de Justicia, sala de Casación penal, SP8446-2017) en estrecha relación con los artículos 2.341 y subsiguientes del Código Civil colombiano en lo que atiende a su vez, a las fuentes de las obligaciones, materia general de los principios del Derecho.

En este orden de ideas, para dar efectivo tratamiento al análisis del incidente de reparación integral y la responsabilidad civil extracontractual, es importante centrar la atención en el concepto de víctimas como una actor determinante en la evolución de las dos instituciones jurídicas estudiadas, sin restricción a que puedan analizarse dentro del mismo estudio las diversas formas de intervención en el proceso penal como un elemento categórico dentro de la comprensión del daño. Es así, que la configuración del análisis de la eficacia y eficiencia del incidente de reparación integral en la justicia penal, parte desde conceptos que tienen en cuenta que “la accidentalidad vial, es la segunda causa de muerte violenta en Colombia, fuente de daños materiales y morales en las personas” (Pantoja y otros. 2010, p. 101) y por tanto el papel determinante en el análisis de las víctimas como sujeto activo de la acción.

Seguido a lo anterior, indicar que dentro del análisis pretendido no solo se abordan temas en cuanto a los presupuestos procesales y de legitimación en la causa para las víctimas desde su configuración en la Ley 906, sino también parte desde el reconocimiento de la efectividad y eficiencia de un sistema jurídico que permita el acceso a la justicia de forma garantista, en consideración a que debido desde el punto de vista de perjudicados, “los topes son bajos y sólo alcanzan a una mínima reparación” (Ceballos, 2005, p. 170).

En síntesis, el proceso de análisis del incidente de reparación a las víctimas de accidentes de tránsito, conlleva a la introspección en la teoría del Derecho alrededor de la responsabilidad civil extracontractual, los mecanismos procesales idóneos que persigan la real garantía de compensación a las víctimas desde su construcción histórica en el derecho internacional y nacional, desde la lectura de los pronunciamientos de la Corte Constitucional

y jurisprudencia respecto de los índices contemplados de accidentalidad y la relación indisoluble entre Derecho penal y derecho civil en el ámbito patrimonial; desde el entendido en que

El examen de las sentencias que han sido identificadas para detectar los criterios utilizados por los magistrados, referidos a las actividades riesgosas y la aplicación de los supuestos de responsabilidad consagrados en el Código Civil nos permite advertir, en primer lugar, que la casuística que evidencia la problemática se concentra, de manera notoria, en los accidentes que derivan de la conducción vehicular. (Woolcott, y otros. 2018, p. 32).

## **2. ELEMENTOS METODOLÓGICOS.**

A partir de la expedición de la Ley 906 de 2004 se presenta en el ordenamiento jurídico colombiano la posibilidad de las víctimas, en acceder a un mecanismo que permita salvaguardar y restablecer pecuniariamente el daño del que fue objeto, de allí y luego de vista la acción civil como una forma igualmente suficiente para suplir los mismos fines propuestos, surge la pregunta por la incidencia de las víctimas y el acceso eficaz y eficiente a la reparación, desde el análisis consolidado del material jurisprudencial del proceso penal, extraído de los principales pronunciamientos en la materia por la Corte Constitucional, de cara a la integridad jurídica en Colombia.

Por ello, en el estudio de categorías conceptuales como el acceso a la justicia real y efectiva se han enriquecido desde ambientes académicos, con el agregado de la transversalidad que comportan los estudios socio jurídicos, una mirada crítica al Procedimiento Penal y Acción Civil, cuando se trata de accidentes de tránsito y sus víctimas, desde una condición agravante en términos penales como lo es el estado de embriaguez.

Es por lo anterior, que la investigación abordó desde el paradigma cuantitativo utilizando herramientas como el análisis multivariado, la relación del proceso penal y la acción civil como dos ámbitos de investigación, desde el análisis jurisprudencial tradicional, utilizando diversos métodos de los paradigmas cualitativo y cuantitativo, que permiten

abordar analíticamente el compendio jurisprudencial de la Corte Constitucional y autoridades judiciales, en su carácter dispositivo, así como en el restablecimiento y búsqueda efectiva y eficiente de reparación a víctimas; ahondando en la incidencia y/o relación que tiene la acción civil en el proceso penal como presupuesto jurídico.

Como consecuencia y en aras de alcanzar el objetivo general de la presente investigación, se ha considerado pertinente recurrir a la triangulación como figura que permite utilizar herramientas de diferentes métodos, para atender a las necesidades particulares del objetivo general o en si la misma investigación, siendo ello, ubicar puntos de referencia para lograr una mayor precisión en el objeto y la obtención de resultados. (Navarro y otros. 2004) De esta forma, la investigación se orientó a analizar la relación entre la acción civil de responsabilidad extracontractual y el incidente de reparación integral, abordada desde las herramientas proporcionadas por la investigación histórica, que tiene como finalidad “describir y analizar el proceso histórico de una variable en una línea de tiempo o por periodos determinados” (Hernández. 2010, p. 161) desde los pronunciamientos de la Corte Constitucional, con énfasis en el proceso penal.

A casusa de lo anterior, la investigación parte desde la identificación de diversos textos académicos y jurídicos que permitieron caracterizar el fenómeno desde una dimensión global específica, en elementos como los índices de accidentalidad por estado de embriaguez, y estadísticas generales de referencia de procesos de la misma índole, así como de pronunciamientos penales desde la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004.

Desde esta intención, la incidencia de la acción civil de responsabilidad extracontractual en la fundamentación jurídica del incidente de reparación integral en el proceso penal, supone la correlación y triangulación de variables de interpretación y medición de eficiencia y efectividad, en la aplicación del Derecho en el reconocimiento económico a la víctima. De modo que, para determinar dicha correlación entre los conceptos jurídicos principales, se realizó la triangulación de la información contenida en la matriz de análisis jurisprudencial conformada por cuatro dispositivos de análisis que fueron fruto del estado del arte legal y jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

En el mismo orden lógico, se establecieron los siguientes dispositivos como eje conceptual desde las definiciones de Michael Foucault en función de la incidencia de la



responsabilidad civil en el proceso penal, en consideración a que según Foucault (1991) en “El dispositivo en las ciencias sociales y en la educación: la piedra angular” (Peñalver. 2016, p. 54)

1. En primer lugar, el dispositivo identifica “un conjunto... heterogéneo que comprende discursos, instalaciones arquitectónicas, instituciones, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas... El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos elementos” (pp. 128-129).
2. En segundo lugar, señala luego, que el dispositivo es la “naturaleza del vínculo que puede existir entre estos elementos heterogéneos” (ídem) [Elementos entre cuales puede ubicarse el incidente de reparación integral y la acción civil].
3. Su tercera afirmación se refiere a que se trata de una “especie de formación que, en un momento histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia” (ídem). [En lo que respecta a las construcciones históricas y fruto de las cuales surge la necesidad de inclusión dentro del sistema penal en 2004 del incidente de reparación integral en el procedimiento de reivindicación de derechos a las víctimas como una alternativa existente y en curso de la jurisdicción penal que materialice el mandato constitucional y los principios rectores del Código]
4. En cuarto lugar, un dispositivo siempre se encuentra inscrito en un juego de poder, soportando unos tipos de saber. [desde el saber ser jurídico expresado en los pronunciamientos de las altas Cortes y la academia y hacia la propuesta consolidada realizada por la investigación, donde se genera una estrecha relación entre los fines propuestos por el incidente de reparación integral que persigue entre otras cosas la materialidad económica de la reparación a la víctima y el proceso civil de responsabilidad civil extracontractual desde su institución patrimonial, en el poder del Derecho dispositivo de acción.

Análogamente, se establece en el siguiente cuadro los dispositivos de análisis que se tuvieron en cuenta en la construcción del análisis jurisprudencial:

Tabla No. 1 - Dispositivos de análisis 01.

No.	FUENTE	DEFINICIONES CATEGORICAS	CATEGORÍA DE ANÁLISIS
1	Código Penal Colombiano	Artículo 269. REPARACION. El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado.	Limitante procesal en el cual la víctima solo puede obtener reparación una vez se haya dictado fallo en primera o única instancia, limitando el ejercicio y Derecho a las víctimas
2	Corte Suprema de Justicia	Imposibilidad de accionar al mismo tiempo en dos jurisdicciones distintas.	El acceso a la información e inseguridad jurídica de escogencia de la víctima en la facultad activa de la acción civil o penal.

3	Corte Suprema de Justicia	<p>Tratándose del trámite incidental a fin de procurar la reparación integral (que en esencia se asemeja a la intervención de la parte civil en los sistemas anteriores, con las variaciones necesarias por el cambio de enfoque), además de tener su fuente en la Norma Superior, parte de la previsión del artículo 11, literal c) del Código de Procedimiento Penal de 2004, de acuerdo con el cual a las víctimas se les garantiza el acceso a la administración de justicia y el reconocimiento del derecho “A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código. (Sala Penal. Sentencia 14 de junio de 2017. Rad. SP8463-2017. M. P. Fernando Castro)</p>	Incidente de Reparación integral como presupuesto de la acción civil.
---	---------------------------	---	---

4	Corte Suprema de Justicia	De tal manera que el tratamiento dado por las normatividades penal y civil a la obligación de reparar económicamente a las víctimas los daños ocasionados con el delito, permite concluir de manera cierta que la acción correspondiente es de naturaleza esencialmente civil, bien que se tramite en el mismo proceso penal o de manera independiente de éste, luego el procedimiento que la rige habrá de consultar ese carácter. (Sala Penal. Sentencia 14 de junio de 2017. Rad. SP8463-2017. M. P. Fernando Castro)	Naturaleza de acción indemnizatoria bien sea en mecanismos incidentales en jurisdicción penal o procesales en civil / Relación de la acción civil y la acción penal.
---	---------------------------	--	--

Fuente: Elaboración propia.

### 3. CONTEXTUALIZACIÓN JURÍDICA.

Para iniciar se expondrá de manera piramidal siguiendo la organización jerárquica establecida por Kelsen los principales presupuestos jurídicos, que permiten el desarrollo del objeto de investigación desde el análisis de los cuatro dispositivos previamente referenciados tomando como punto de partida los elementos constitucionales legales y reglamentarios sobre el parámetro de estudio.

De este modo, y partiendo desde el reconocimiento de los presupuestos en Derecho Internacional, constitucionales y legales que permiten la aprehensión de la línea jurisprudencial, se distinguen los siguientes como las principales normas rectoras para la resolución del problema de investigación:

Consecuentemente, desde un análisis puramente internacional, y en palabras de Alvis Nieto (2019) en “Análisis del carácter complementario del proceso de reparación de víctimas en Colombia (Ley 975 de 2005) y el adelantado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos” la justicia posee en términos de reparación integral a víctimas antecedentes como la Comisión on Crime Prevention and Criminal Justice (1992) así como las determinadas iniciativas europeas, tales como la European Convention on Compensation of Victims of Violent Crime (1985). De igual forma, destacar el Estatuto de Roma y sus reglas de procedimiento (1998) junto con el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Ahora bien, desde espacios constitucionales y legales pueden rescatarse los siguientes:

Tabla No 2.- Elementos de Orden Constitucional.

<b>Elementos de orden constitucional</b>	
<b>Artículo</b>	<b>Desarrollo</b>
Artículo 29	El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
Artículo 189	Numeral 20. Velar por la estricta recaudación y administración de las rentas y caudales públicos y decretar su inversión de acuerdo con las leyes.
Acto Legislativo 03 de 2002	Por el cual se reforma la Constitución Nacional.

Fuente: Elaboración propia.

Tabla No. 3. – Elementos de orden legal.

<b>Elementos de orden Legal</b>	
<b>Número.</b>	<b>Desarrollo</b>

Ley 84 de 1973	Artículo 1984. <FUENTE DE LAS OBLIGACIONES>. Las obligaciones nacen, [...] ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño a otra persona, como en los delitos.
	ARTICULO 1613. <INDEMNIZACION DE PERJUICIOS>. La indemnización de perjuicios comprende el daño emergente y lucro cesante, ya provenga de no haberse cumplido la obligación, o de haberse cumplido imperfectamente, o de haberse retardado el cumplimiento.
	ARTICULO 1625. <MODOS DE EXTINCION>. Toda obligación puede extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula. / Las obligaciones se extinguen además en todo o en parte: 1o.) Por la solución o pago efectivo.
	ARTICULO 2341. <RESPONSABILIDAD EXTRA CONTRACTUAL>. El que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización, sin perjuicio de la pena principal que la ley imponga por la culpa o el delito cometido.
	ARTICULO 2360. <COSTAS POR ACCIONES POPULARES>. Si las acciones populares a que dan derecho los artículos precedentes, se declararen fundadas, será el actor indemnizado de todas las costas de la acción, y se le pagarán lo que valgan el tiempo y la diligencia empleados en ella, sin perjuicio de la remuneración específica que conceda la ley en casos determinados

	ARTICULO 2512. <DEFINICION DE PRESCRIPCION>. La prescripción es un modo de adquirir las cosas ajenas, o de extinguir las acciones o derechos ajenos, por haberse poseído las cosas y no haberse ejercido dichas acciones y derechos durante cierto lapso de tiempo, y concurriendo los demás requisitos legales. Se prescribe una acción o derecho cuando se extingue por la prescripción.
	ARTICULO 2535. <PRESCRIPCION EXTINTIVA>. La prescripción que extingue las acciones y derechos ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas acciones.
Ley 599 de 2000	Capítulo Único de principios generales
Ley 788 de 2002	Por la cual se expiden normas en materia tributaria y penal del orden nacional y territorial; y se dictan otras disposiciones
Ley 906 de 2004	ARTÍCULO 11. DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS. El Estado garantizará el acceso de las víctimas a la administración de justicia, en los términos establecidos en este código. / c) A una pronta e integral reparación de los daños sufridos, a cargo del autor o partícipe del injusto o de los terceros llamados a responder en los términos de este código;
	ARTÍCULO 102. PROCEDENCIA Y EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL. <Artículo modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> En firme la sentencia condenatoria y, previa solicitud expresa de la víctima, o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador convocará dentro de los ocho (8) días siguientes a la audiencia pública con la que dará inicio al incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y ordenará las citaciones previstas en los

	artículos 107 y 108 de este Código, de ser solicitadas por el incidentante.
	ARTÍCULO 108. CITACIÓN DEL ASEGURADOR. la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado
Ley 1395 de 2010	Por la cual se adoptan medidas en materia de descongestión judicial.

Fuente: Elaboración propia.

Luego de revisados los principales aportes de orden jurídico se realizó la construcción de la línea jurisprudencial desde la fundamentación y desarrollo de los dispositivos de análisis previamente referenciados, resaltando que la pertinencia del análisis jurisprudencial en la investigación, se encuentra medido en que, para poder generar una propuesta coherente y homogénea en Derecho, que sirva como fundamento de la medición de la efectividad y eficiencia del incidente de reparación integral, debe tomarse como punto de partida que

las decisiones que toman los operadores judiciales en determinados casos, con las que se pretende resolver un problema jurídico [...] conforman una interpretación de la normatividad constitucional, es posible identificar una evolución sobre el tema que en el momento es objeto de análisis, suponiendo también, que para trazar un alineamiento ya sea de forma generar o concreta es necesario considerar el contexto en el que se enmarca cada situación. (Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 2018)

De modo que, la línea jurisprudencial es extraída desde la comprensión de la realidad social, reconociendo que en términos de la investigación socio-jurídica se hace indiscutiblemente necesario “asimilar los aspectos objetivos, a partir de conocimientos y valores, expresado en un nivel también real pero subjetivo” (Bonilla & Rodríguez, 2005, p.



60), en donde se requiere la relación entre los dispositivos de análisis desde su significación en las víctimas como hecho social.

Lo anterior como fundamento a las decisiones de la Corte Constitucional en que deba rescatar los presupuestos en la Constitución Política y así mismo en la Ley Internacional, desde la revisión realizada.

En este orden de ideas, y desde la pretensión de la investigación que recoge un enfoque social y jurídico como forma de homogenizar un discurso esencialmente legal en el procedimiento penal y acción civil, la línea jurisprudencial parte desde la 906 de 2004 que incorpora al ordenamiento jurídico colombiano la facultad penal de la víctima dentro de su tramitología en el proceso, la potestad de perseguir la indemnización al daño causado; hecho permite ubicar temporalmente el análisis desde los postulados tanto de la Corte Constitucional como de la Corte Suprema de Justicia en la Sala Penal hasta la fecha.

De modo que, las sentencias fueron seleccionadas tomando como base criterios de temporalidad, a partir de la Ley 906 de 2004 como punto de enfoque en la enunciación de conceptos o postulados con referencia al incidente de reparación integral y/o responsabilidad civil extracontractual, con especial énfasis en casos donde haya mediado accidentes de tránsito; la selección de la jurisprudencia también fue resultado de la consulta en relatorías de la Corte Constitucional, bases de datos de su página oficial.

#### **4. LINEA JURISPRUDENCIAL.**

Tabla No. 4 Línea jurisprudencial.

<b>Año</b>	<b>Corte Constitucional</b>	<b>Corte Suprema de Justicia</b>
<b>2004</b>		
<b>2005</b>		
<b>2006</b>	Sentencia C-370 / Sentencia C-425	Sala Penal. Sentencia de 22 de junio de 2006, Rad. 24.817
<b>2007</b>	Sentencia C-516	

<b>2008</b>		
<b>2009</b>	Sentencia C-409	Sala Penal. Sentencia de 1° de julio de 2009, Rad. 30.800
<b>2010</b>	Sentencia C-059	
<b>2011</b>	Sentencia C-250	
<b>2012</b>		
<b>2013</b>		
<b>2014</b>	sentencia C-286 / Sentencia C-180	
<b>2015</b>		
<b>2016</b>	Sentencia C-233	Sala Penal, SP4559- RAD. 47076
<b>2017</b>		Sala Penal. Sentencia del 14 de junio de 2017. SP8463-2017 / sala penal, SP13300-2017 /sala penal, SP6029-2017 /
<b>2018</b>		Sala Penal. Sentencia del 29 de agosto de 2018. AP3636 - Rad. 53212 /
<b>2019</b>		
<b>2020</b>		

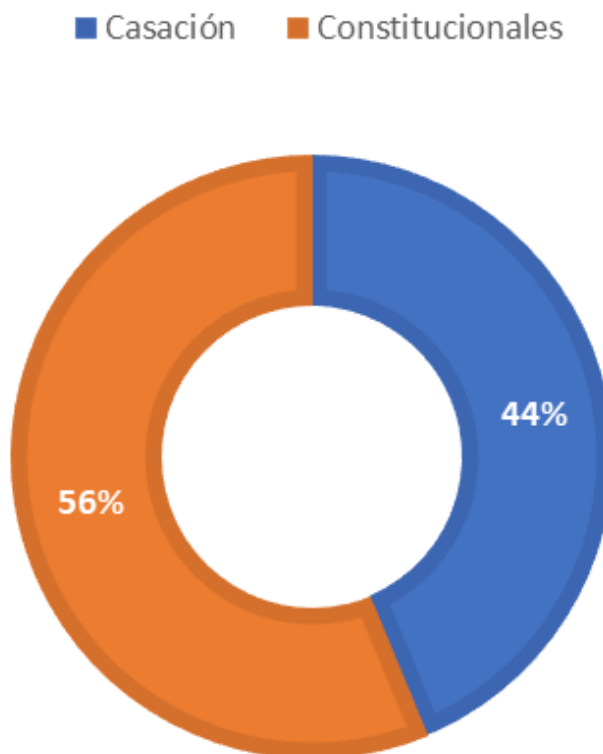
Fuente: elaboración propia.

Tabla No. 5 – División de sentencias en percentil.

Sentencias	No.	%
Casación	07	44%
Constitucionales	09	56%
Total	16	100%

Fuente: Elaboración propia.

Gráfico No 1. Gráfico por corporación.



Fuente: Elaboración propia

#### **4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS.**

Como quiera que se realizó el análisis e identificación de las sentencias se logran generar las siguientes consideraciones del elemento cronológico:

- Se evidencia que efectivamente existe un mayor porcentaje de análisis desde la Corte Constitucional en los dispositivos propuestos, por cuanto la jurisprudencia que fue seleccionada tiene una clara incidencia en el objeto de la investigación y permite aprehender el incidente de reparación directa en desarrollo de la responsabilidad civil extracontractual como un fenómeno jurídico regulado y

claramente constitucional, de cara a la materialización efectiva del insumo previamente referenciado en el marco internacional y desde la Carta Política.

- Como segunda consideración es importante resaltar que existen dos momentos en los cuales el afluente de casos resueltos por la Corte Suprema de Justicia en su sala Penal, son exponencialmente mayores que en años donde incluso no existe registro; de modo que, si se analiza la operación judicial, respecto de los casos evidenciados en los dos momentos referidos, puede llegarse a concluir que el operador de primera y segunda instancia no ha sido eficaz y eficiente en la prevención de litigios y la resolución de los mismos en Derecho, optando de esa forma en el aumento de demandas de casación en las altas cortes.

- Como tercer resultado se evidencia que existe un decrecimiento en los últimos años, respecto de los procesos de casación y/o demandas de constitucionalidad en el tema investigando, derivando ello, en una primera conclusión en terminas de efectividad y eficiencia de la operación jurídica en la concreción de reparación a víctimas.

## **5. ANALISIS JURISPRUDENCIAL.**

Luego de realizar la identificación cronológica de los principales pronunciamientos de las altas Cortes en el problema de investigación, se hace conveniente saldar en términos metodológicos, los aportes de cada una de estas jurisprudencias desde un elemento factico y transversal que sea alimentado desde la estructura de los dispositivos de análisis. Por otro lado, referir la estrecha relación que existe en la fundamentación del incidente de reparación integral y la responsabilidad civil extracontractual como su presupuesto jurídico.

En este sentido, se presenta la siguiente división a propósito de los dispositivos propuestos, donde puede evidenciarse la ubicación por cada una de las categorías de análisis pretendidas en las sentencias de ambas corporaciones que aportan un insumo jurídico suficiente para el desarrollo y tratamiento de la misma.

De esta forma, se relacionan las sentencias identificadas según su correspondencia y anualidad:

Tabla No. 6. División por dispositivos de análisis.

<b>Dispositivo 01</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>
C-370 de 2006				
C-425 de 2006				
Rad. 24.817				
C-516 de 2007				
C-409 de 2009				
C-059 de 2010				
C-250 de 2011				
C-286 de 2014				
C-180 de 2014				
C-233 de 2016				
SP4559- RAD. 47076				
SP8463-2017				
SP13300-2017				
SP6029-2017				
AP3636 - Rad. 53212				

Fuente: Elaboración propia.

Como consecuencia del cuadro y en desarrollo del dispositivo de análisis número 01, que refiere como categoría la “Limitante procesal en el cual la víctima solo puede obtener reparación una vez se haya dictado fallo en primera o única instancia, limitando el ejercicio y Derecho a las víctimas” en desarrollo del artículo 269 del Código Penal, se hace pertinente mencionar como en sentencia C-370 de 2006

Los demandantes consideran que el artículo 23 de la Ley 975/05, que establece el procedimiento aplicable al incidente de reparación integral afecta el derecho constitucional de reparación de las víctimas. Con este fin, los actores advierten que ese trámite no es la única vía judicial para que las víctimas obtengan tal reparación, sino que a partir de lo consagrado en los artículos 42, 43 y 45 de la misma Ley, existen otros instrumentos para ese fin. De esta manera, la demanda sostiene

*que “si la víctima no solicita que se abra el incidente de reparación no pierda por ello el derecho a ser reparada (Corte Constitucional. Sentencia C-370. 2006)*

Por lo cual, existe una limitante jurídica en el desarrollo de la carta Política y la materialización efectiva del Derecho a las víctimas, donde es claro, que limitar el ejercicio de una garantía real de reparación hasta la finalización en primera o única instancia del proceso penal, retrasa la salvaguarda de los Derechos del sujeto pasivo, y aún con más gravedad en delitos derivados de accidentes de tránsito, que en su mayoría obedecen a lesiones personales e incluso la muerte; reconociendo que “No es extraño al incidente de reparación integral ni su imperio termina con la firmeza del fallo que declare la responsabilidad penal, pues es independiente de tal declaratoria”(Corte Suprema de Justicia Boletín Jurisprudencial 2018) hecho que genera una doble implicación de cara a los conceptos sostenidos de revictimización, en el entendido que “el impacto del delito llega a tener consecuencias de tal gravedad, que pueden propiciar arbitrarias modificaciones en la vida de la víctima y la de sus familiares, en numerosos casos estas alteraciones llegan a ser irreversibles” (Mantilla. 2015, p. 5).

Lo anterior, considerando que el incidente de reparación integral es la posibilidad que tienen las víctimas de acceder en curso de la misma jurisdicción, a una reparación económica del daño del cual fue objeto y en donde la eficacia del proceso incidental, en relación al dispositivo dos y conforme a lo tratado por la Corte Constitucional (opus cit) aun cuando existen diversos mecanismos para que la víctima pueda acceder a una reparación efectiva, se ve claramente truncado si se analiza desde las tensiones procesales y cargas económicas que deriva el acceso a la justicia y esencialmente en la promoción de procesos paralelos, luego de la comisión de la falta donde se pretenda el reconocimiento como garantía económica en la jurisdicción civil y el reproche penal al acto aun cuando si se revisan las consideraciones de la corporación Constitucional que afirma:

*Los artículo 86 y 89 de la Ley 1395 de 2010, modificatorios de los artículos 102 y 106 de la Ley 906 de 2004 prevén la procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral, una vez en firme la sentencia condenatoria, y precisa el término de caducidad para la solicitud de reparación integral a los treinta (30) días después de haber quedado en firme el fallo condenatorio, circunstancias que, para la Corte,*

*no vulneran los derechos del tercero civilmente responsable, ya que dichas disposiciones no entrañan limitación a los derechos de participación en las decisiones del tercero civilmente responsable, puesto que el derecho a su participación dentro del proceso penal será constitucionalmente legítima únicamente a partir del momento en que se ha determinado la responsabilidad penal del sujeto por el cual deberá responder civilmente, momento que surge necesariamente - después de encontrarse en firme la sentencia de condena - con la iniciación del incidente de reparación integral y su citación al mismo, en el que contará con todos los derechos y garantías tendientes a su participación activa y a la construcción de la decisión que lleve a su culminación. Asimismo, al ser citado el tercero civilmente responsable al incidente de reparación integral, cuenta con todas las garantías de acceso a la justicia, con la posibilidad de debatir, dentro del incidente, la existencia o no del perjuicio y el monto de la reparación; a objetar las pretensiones de la víctima, así como su relación para con el condenado y su deber de reparación; a solicitar la citación al asegurador; a participar en las audiencias; a conciliar y a interponer los recursos a que haya lugar, en desarrollo de los postulados establecidos en los artículos 102 y ss. del CPP. En cuanto a la caducidad de la solicitud de reparación integral treinta (30) días después de haber quedado en firme la sentencia de condena, tampoco se vulnera el derecho del tercero civilmente responsable a la participación en las decisiones que le afectan y a la tutela judicial efectiva, ya que si bien, en desarrollo de la libertad de configuración legislativa el legislador estableció dicho término con el fin de racionalizar los procedimientos judiciales e imprimirles seguridad jurídica, el límite se considera válido pues establecida la constitucionalidad del papel del tercero civilmente responsable circunscrito a la etapa del incidente de reparación integral, la norma acusada busca la celeridad en los procesos judiciales, sin menoscabo de los derechos de partes e intervinientes. (Corte Constitucional. Sentencia C-250. 2011.)*

Sin distinción a que como se ha venido mencionando no solo el tercero civilmente responsable, o el sujeto activo cuentan con el amparo constitucional, sino que también deben asegurarse los Derechos Constitucionales de la víctima en el entendido, que sus intereses luego de la comisión de la falta se ven truncados en la compensación económica durante el

trámite del proceso, anudado al impacto social y personal que generó la comisión del hecho, desconociendo de esta forma que el derecho internacional por medio de diversos instrumentos, se ha encargado de impulsar el reconocimiento de los derechos y garantías que deben acompañar a las víctimas del delito a lo largo de las actuaciones judiciales que estas adelanten. (Puentes. 2017).

Visto lo anterior y como complemento a la tesis sostenida que se aleja de las consideraciones en un primer momento de la Corte Constitucional, el incidente de reparación integral en su materialización jurídica presenta otro tipo de limitantes y es el desarrollo propiamente dicho de la actuación penal en la imputabilidad del sujeto activo, por cuanto en correspondencia con los conflictos derivados en la configuración jurídica del delito, por razones de la complejidad de determinación de responsabilidad y tipo penal que enfrenta el operador jurídico, se ponen en tela de juicio igualmente la posibilidad de la víctima a obtener una reparación justa, Maxime cuando en el proceso incidental como se revisó existe la oportunidad de oponerse, presentar pruebas y controvertir, incluso cuando ya ha existido un fallo que determine responsabilidad penal; hecho que si bien lo dijo la Corte materializa el derecho del tercero civilmente responsable produce el mismo efecto de revictimización ya tratado. (Hernández. 2011).

Ahora bien, hechas las consideraciones de tipo jurídico-social alrededor de las posibles condiciones relativas a la efectividad y eficacia debe sumarse también que

por razones como la ausencia de garantías económicas que dificultan el cumplimiento de la carga indemnizatoria que tiene a su cargo el responsable del daño, o el tiempo promedio de un proceso judicial, dicha compensación simbólica o económica no siempre se ve satisfecha (Montoya. 2015)

De modo que, y de acuerdo al abordaje y propuesta desarrollada por Montoya (*opus cit*) el uso de medidas cautelares en el proceso incidental, comportaría una garantía indispensable para el aseguramiento de la reparación a víctimas fruto de accidentes de tránsito, cuando la pretensión de la investigación se centra en aquellos donde ha mediado estado de embriaguez por parte del conductor del vehículo, siendo ello no una garantía de reconocimiento que deba tenerse en cuenta en el proceso incidental, sino que sea asegurada incluso desde la investigación penal propiamente dicha, que puede llegar a ser causada o no



luego del fallo que determine responsabilidad, en razón a que la Corte Suprema de Justicia ha afirmado que

Entonces, puede concluirse: i) consagra una medida cautelar con la que se pretende garantizar el pago de perjuicios en el evento de **declararse responsabilidad penal**, ii) al igual que el embargo y secuestro, su efecto consiste en retirar bienes del comercio, en este caso, susceptibles de registro y iii) procede sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. (Corte Suprema de Justicia. 2015. AP6750-2015) (Negrita agregada)

De modo que, si no existiese la declaratoria de responsabilidad no puede el sujeto pasivo perseguir la compensación económica si se configura desde la óptica de Montoya (*opus cit*), es allí, donde se teje la relación entre las limitaciones que sufre el incidente de relación integral frente al dispositivo tercero en lo que respecta a la búsqueda de consolidar las condiciones materiales que garanticen no solo en el deber ser y requisito para el acceso a la justicia en el proceso incidental, ya que

Uno de los cuestionamientos más importantes que ocurren al interior de la praxis judicial en el desarrollo del sistema penal colombiano es, indiscutiblemente, la determinación de cuáles son las reglas de prueba que deben ser aplicadas a la hora de llevar a cabo el Incidente de Reparación Integral. (Peláez. 2013, p. 30)

sino que también se encuadre respectivamente a su fundamentación desde la acción civil, por cuanto

*En el nuevo sistema, se suprimió la demanda civil, el fallo emitido en el sentido de declarar la responsabilidad penal no contiene condena alguna pecuniaria, motivo por el cual se creó el incidente de reparación integral para determinar y precisar los aspectos civiles de la responsabilidad del acusado y de los terceros. Por consiguiente, ni durante las etapas de investigación y juicio oral se debaten realmente aspectos relacionados con la determinación de la responsabilidad civil por el ilícito, con lo cual, dejar participar al tercero en el curso de aquéllas resultaría injustificado; es más, conduciría a romper el equilibrio procesal en relación con la víctima, la cual, en materia de responsabilidad civil únicamente entraría a participar en el proceso*

*durante el incidente de reparación integral. Con todo, la Corte precisa que, la garantía del ejercicio del derecho de defensa del tercero civilmente responsable durante el incidente de reparación integral, presupone que éste sea efectivamente citado, de conformidad con las formalidades establecidas en el C.P.P., es decir, se trata de un requisito sine qua non para el establecimiento de su eventual responsabilidad patrimonial. (Corte Constitucional. 2006. Sentencia C-425)*

Adicionalmente, y en palabras de Arenas (2016) en términos del proceso incidental existen claros vacíos desde la perspectiva de una justicia restaurativa y garante de los Derechos Humanos, ya que, si se analiza el requisito sine qua nom desde el que se funda el incidente, es decir, la etapa propiamente en que puede ser promovido, yerra el legislador, por cuanto

El proceso penal no termina con una decisión de fondo, denominada de primera instancia dado que puede ser apelada ante el tribunal superior del distrito judicial, además contra las decisiones de segunda instancia procede según la ley 906 de 2004 en su artículo 181 el recurso extraordinario de casación, una vez ello, tendrá la víctima treinta (30) días para promover el incidente de reparación integral, dentro del cual tenemos tres (3) audiencias de conciliación, de igual manera con una apelación en segunda instancia y como si fuera poco, también procede el recurso extraordinario de casación, es decir, que es una acción de no acabar, al no tener un término preciso de duración. (Arenas. 2016, p. 11)

Seguido a ello, y en palabras de Woolcott (2017) La responsabilidad civil como institución que repara los daños, puede cumplir un rol importante, aunque no alcance los mínimos necesarios, donde adicionalmente, considerar que, si se revisa desde el panorama de la responsabilidad civil,

se indemniza todo el perjuicio, pero nada más que el perjuicio. Este principio forma parte del sistema de responsabilidad civil y más ampliamente aún, del sistema general de reparación del daño. Pero el hecho de ser un principio no significa que no comprenda limitaciones. En numerosos supuestos la indemnización no alcanza a la integridad del perjuicio sufrido. (Domínguez. 2010).

Corolario a lo anterior, el acceso a la información jurídica de escogencia en la legitimación por activa de la acción penal o civil, comporta una categoría fundamental, por cuanto el incidente de Reparación integral tiene su fundamentación en la acción civil y debe estar regido bajo las consideraciones que se han hecho en el procedimiento de dicha jurisdicción por cuanto “principio general de la responsabilidad se tiende a postular que cuando se causa daño a otro afectando sus bienes, lesionando su integridad corporal o vulnerando su conjunto de derechos fundamentales” (Sandoval. 2013, p. 237,) de modo que, parte desde la afectación a cualquier tipo de bien jurídicamente tutelado. Teniendo en cuenta que “en contexto de evolución de los tiempos y cambios sociales y económicos, la jurisprudencia fue ampliando el campo de aplicación de la responsabilidad civil a nuevas hipótesis de daños” (Woolcott. 2018, p. 25)

En este orden de ideas, el incidente de reparación integral no solo va a ser invocado como un procedimiento que busca satisfacer la afectación de un bien jurídicamente tutelado, ya que en el proceso penal el fin de la pena en ultimas es la reprochabilidad que existe alrededor de la acción u omisión cometida por el sujeto activo; sino que se encamina en palabras de Sandoval (2013) al restablecimiento del equilibrio por la interrupción del daño a la tranquilidad que hasta entonces gozaba la víctima cargando en una esfera propiamente económica o patrimonial o con equivalente pecuniario.

En todo caso, la potestad de acción luego de contempladas las consideraciones previas recae directamente en la víctima teniendo en cuenta que según Saray (2013):

La Ley 600 de 2000, recordó la Corte Constitucional en sentencia C-250 de 6 abril de 2011<sup>93</sup>, facultó que la vinculación del tercero civilmente responsable podía solicitarse desde la admisión de la demanda de parte civil, o incluso antes de proferirse la providencia de cierre de la investigación<sup>94</sup>. Como consecuencia de dicha disposición, el embargo y secuestro de los bienes de aquél podía solicitarse una vez ejecutoriada la resolución de acusación<sup>95</sup>; y de conformidad con el artículo 141 de la citada Ley, el tercero civilmente responsable tenía “los mismos derechos y facultades de cualquier sujeto procesal”; es decir, que una vez vinculado legalmente, el tercero civilmente responsable podía ejercer su derecho de defensa, también sobre las medidas cautelares decretadas en su contra. [...]La víctima, en todos los sistemas,

siempre conserva la opción de acudir directamente ante la jurisdicción civil ordinaria con el propósito de obtener la reparación del daño causado. (p. 68).

Dicho esto, entonces es menester traer a colación el cuarto dispositivo en relación con el número dos, por cuanto si se parte desde la premisa referida por Saray (2013) la víctima es quien debe escoger en su albedrío el camino más expedito y garantista donde pueda obtener una compensación efectiva a los perjuicios causados, y en donde el legislador contempla un reto amplio en el recorrido procesal y desarrollo del incidente de reparación integral en procesos donde ha mediado el estado de embriaguez en accidentes de tránsito, si se reconoce que “Para el sistema jurídico, la conducción de vehículos automotores es considerada como una actividad peligrosa (Santos, 1996), (Tamayo, 2008) y constituye la segunda causa de muerte violenta en Colombia” (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2006) y que adicionalmente en las estadísticas de tiempos en los cuales se resuelven los accidentes de tránsito y las víctimas reciben indemnización en cualquiera de sus modalidades se encuentra en

promedio un proceso por Homicidio Culposos en Accidente de Tránsito, desde la fecha en que ocurre hasta la última sentencia dictada o en su defecto, a la fecha de corte establecida para la recolección de información, tiene una duración de 56 meses (cinco años aproximadamente). El proceso más corto dentro de este análisis se demoró cuatro meses, mientras que el más largo duró 127 meses (10 años aproximadamente). En promedio la Fiscalía tardó 23 meses en la fase de investigación y dictar la resolución de acusación de los 246 (98%) procesos que llegaron hasta esta fase. El menor tiempo fue de dos meses y el mayor tiempo fue de 71 meses (cerca de seis años). (Pantoja, 2010, p. 109).

En complemento a lo anterior, es claro que el proceso penal en Colombia visto desde el panorama de las víctimas no es bastante alentador; sin embargo y siguiendo la misma línea discursiva del dispositivo cuarto la relación existente entre el proceso penal y civil, donde este último es fundamento del primero, por cuanto ha dicho la Corte Suprema de Justicia que

aparece regulado en el Código Penal, Libro Primero, Título IV, Capítulo Sexto, sobre la responsabilidad civil originada en el hecho delictivo y la consecuente obligación de reparar los daños materiales y morales causados con la infracción; la facultad de

las personas naturales o jurídicas perjudicadas de promover la acción civil a fin de conseguir la reparación; la determinación de quiénes están obligados a indemnizar, además del penalmente responsable; y las formas de extinción de la acción civil, esto es, la prescripción cuando se ejercita dentro del mismo proceso penal, que opera únicamente respecto del procesado, y por remisión los demás eventos previstos en el Código Civil. (Corte Suprema de Justicia. 2017. Rad. 47446)

Es claro, que de ambas formas las partes son quienes a su albedrío optan por la reprochabilidad y compensación económica en una u otra jurisdicción que son excluyentes entre sí, pero que en últimas la penal, ha recogido el mismo proceso civil como una forma de concentrar en el mismo proceso la obligación económica derivada del delito, con las limitantes de orden procesal y en términos de efectividad y eficacia ya analizadas de cara al papel de las víctimas en siniestros de tránsito de cara a que "El sistema de responsabilidad civil se encuentra bajo un constante asedio en tanto no logra ni la justicia ni la eficiencia en compensar a las víctimas de los accidentes" (Deakin, 2014, p. 275).

## CONCLUSIONES

En la recopilación de experiencias normativas y al decir “experiencias” se hace referencia a que parte desde la aprensión del conocimiento en la propuesta crítica de la Ley, se han significado en el Derecho diversas manifestaciones de la víctima que en términos procesales ha ido adquiriendo importancia dentro del proceso penal. Sin embargo, desde la perspectiva comprendida en el análisis jurisprudencial y las consideraciones realizadas bajo los fundamentos metodológicos de Foucault se generan las siguientes reflexiones y alternativas de solución al problema jurídico evidenciado en lo siguiente:

1. La efectividad medida en términos de éxito procesal o demandas hacia el procedimiento incidental de reparación integral de perjuicios en accidentes de tránsito, evidencia que la víctima se encuentra supeditada a limitantes de orden procesal en el ejercicio y materialización efectiva de la reparación y/o compensación económica frente a los daños de los cuales fue objeto.

2. Con relación al numeral anterior y desde una posición meramente metodológica en la construcción de la línea jurisprudencial, en los reportes fallos constitucionales o de

casación que reposan en ambas corporaciones, no es mayor el registro que se encuentra sobre reparación a víctimas fruto de accidentes de tránsito, por lo que la efectividad jurídica del incidente no presenta una estadística clara en las consideraciones y reportes jurisdiccionales, pese a las discusiones e implicaciones sociales que se mencionan en la investigación, lo que refiere dos interrogantes principales: ¿El incidente de reparación integral a pesar que ha sido objeto de crítica en el ámbito académico no ha sido formalizado en las altas Cortes? O ¿Las Cortes en especial la Corte Constitucional no ha abordado el tema desde la complejidad social que se teje en los índices de accidentalidad del país?

3. Corolario a lo anterior, si bien es efectivo el proceso jurídico mediante el cual la víctima puede acceder a la garantía y reconocimiento económico frente al daño causado en accidentes de tránsito, no es eficaz, si se analiza desde la óptica construida en el criterio de revictimización y los conflictos derivados del hecho típico antijurídico y culpable del que objeto, de cara a las implicaciones procesales existentes.

4. En relación con el dispositivo número tres y cuatro, es importante afirmar que la acción civil de responsabilidad es uno de los pilares y presupuesto fundante del incidente de reparación integral, en el entendido que los procedimientos establecidos para tales fines, han sido consideraciones seculares, aunque no convergentes para las víctimas.

5. Se propone una revisión de las medidas cautelares como mecanismo que permitiría asegurar el cumplimiento de las obligaciones civiles en curso del proceso penal, donde resultarían materializados los fines propuestos para el cual se creó el incidente de reparación integral.

### **REFERENCIAS.**

Acto Legislativo 03. Congreso de la Republica de Colombia 2002.

Alvis, L (2019) Análisis del carácter complementario del proceso de reparación de víctimas en Colombia (Ley 975 de 2005) y el adelantado en el Sistemas Interamericano de Derechos Humanos: Universidad Católica de Colombia. Colombia.

Arenas Zapata, J (2016) Eficacia del incidente de reparación integral para la víctima del delito. Trabajo de grado. Universidad Militar Nueva Granda: Colombia.

Bonilla, E & Rodríguez, P. (2005) Más allá del dilema de los métodos. Bogotá, Colombia: Norma.

Ceballos, R. (2005). La Responsabilidad Civil Automovilística y el Aseguramiento Obligatorio y Voluntario: Un Estudio en el Derecho Colombiano y Español. Madrid. Universidad Carlos III de Madrid: España.

Constitución política de Colombia [Const.] (1991) Artículo 13 [Titulo II]. 2da Ed. Legis.

Corte Constitucional (2006) Sentencia C-425. M.P. Humberto Antonio Sierra.

Corte Constitucional (2006) Sentencia C-370. M.P. Manuel Cepeda, Jaime Córdoba, Rodrigo Escobar, Marco Monroy, Álvaro Tafur, Clara Vargas.

Corte Constitucional (2007) Sentencia C-516. M.P. Jaime Córdoba.

Corte Constitucional (2009) Sentencia C-409. M.P. Juan Carlos Henao.

Corte Constitucional (2010) Sentencia C-059. M.P. Humberto Antonio Sierra.

Corte Constitucional (2011) Sentencia C-250. M.P. Mauricio González.

Corte Constitucional (2014) Sentencia C-286. M.P. Luis Ernesto Vargas.

Corte Constitucional (2014) Sentencia C-180. M.P. Alberto Rojas Ríos.

Corte Constitucional (2016) Sentencia C-233. M.P. Luis Ernesto Vargas.

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de 22 de junio de 2006, Rad. 24.817. M.P. Álvaro Pérez.

Corte Suprema de Justicia. Sala Penal. Sentencia de 1º de julio de 2009, Rad. 30.800, M.P. José Leónidas Bustos Martínez

Corte Suprema de Justicia (2015) Sentencia AP6750-2015. Rad. 47042, M.P. José Luis Barceló Camacho

Corte Suprema de Justicia (2016) Sala Penal. Sentencia del 13 de abril de 2016- Rad. SP4559- RAD. 47076. M.P. José Barceló.

- Corte Suprema de Justicia (2017) Sala Penal. Sentencia del 14 de junio de 2017. Rad. 47446. SP8463-2017. M. P. Fernando Castro
- Corte Suprema de justicia, (2017) sala penal. Sentencia del 30 de agosto de 2017. SP13300. M.P. Fernando Castro.
- Corte Suprema de justicia, (2017) sala penal. Sentencia del 03 de mayo de 2017. SP6029. M.P. Fernando Castro.
- Corte Suprema de Justicia (2018) Sala Penal. Sentencia del 29 de agosto de 2018. AP3636. M.P José Barceló.
- Corte Suprema de Justicia (2018) Sala Penal. Boletín Jurisprudencial. Rescatado de <http://www.cortesuprema.gov.co/corte/wp-content/uploads/relatorias/pe/b1dic2018/Boletin%20Jurisprudencial%202018-12-19.pdf>
- Deakin, S. (2014). La evolución de la responsabilidad extracontractual. *Revista chilena de derecho privado*, pp. 275-287. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722014000200007>
- Domínguez, R (2010). Los límites al principio de reparación integral. *Revista chilena de derecho privado*, (15), pp. 9-28. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-80722010000200001>
- Foucault, M. (1991b). *Saber y verdad*. Madrid: La Piqueta.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la investigación*.
- Hernández, M. (2011) Jurisprudencia sobre homicidio culposo agravado en la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. *Novum Jus: Revista especializada en Sociología jurídica y política*, 5(1), 117-137. Recuperado de [https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas\\_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/688/706](https://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/Juridica/article/view/688/706)
- Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. (2006). Bogotá. *Accidentes de Tránsito*. Revista Forenses.
- Ley 84 de 1973. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia.



Ley 599 de 2000. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia.

Ley 788 de 2002. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia.

Ley 906 de 2004. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia.

Ley 1395 de 2010. Bogotá: Congreso de la Republica de Colombia.

Mantilla, S (2015) La revictimización como causal de silencio de la víctima. *Revista Ciencias Forenses de Honduras*, p. 5.

Montoya, C, J. (2015). De la reparación integral por accidente de tránsito: un estudio sobre la necesidad del decreto de medidas cautelares innominadas para garantizar la reparación integral de las víctimas. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia

Navarro, L., Pasadas del Amo, S., & Ruiz, J. (2004). La triangulación metodológica en el ámbito de la investigación social: dos ejemplos de uso. *Recuperado el, 19*.

Pantoja, M Gómez D Ceballos, R y Trujillo M: (2010) Criterios de cuantificación en accidentalidad vial: una propuesta de política judicial. Universidad del Valle. Cuadernos de administración. Colombia, p. 101.

Peláez, J. (2013). Reglas de prueba en el incidente de reparación integral. *Academia & Derecho*, (7), 29-39. <https://doi.org/10.18041/2215-8944/academia.7.2523>.

Peñalver L. (2016). El dispositivo en las Ciencias Sociales y en la educación: La piedra angular. *Cumbres*, 2(1), 49-58. Recuperado de <http://investigacion.utmachala.edu.ec/revistas/index.php/Cumbres/article/view/36>

Puentes, J. R. (2017). Los conceptos de restablecimiento del derecho y reparación integral como garantías de la víctima de la conducta punible. Trabajo de Grado. Universidad Católica de Colombia. Facultad de Derecho. Bogotá, Colombia.

Sandoval, D. 2013. Reparación integral y responsabilidad civil: el concepto de reparación integral y su vigencia en los daños extrapatrimoniales a la persona como garantía de los derechos de las víctimas. *Revista de Derecho Privado*. 25 (dic. 2013), 237-273.

Saray N (2013) Incidente de reparación integral de perjuicios en la Ley 906 de 2004. Primera Edición. Fiscalía General de la Nación. Colombia.

Universidad Colegio mayor de Cundinamarca (2018) sello editorial. Bogotá D.C.

Woolcott, O. Monje, D. Comandé, G. Peláez, R. y Alarcón, A. (2018). Estudios contemporáneos de derecho privado. Responsabilidad civil, propiedad, contratos y obligaciones. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá. ISBN: 978-958-5456-17-4, p. 25. Recuperado de: <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/estudios-contemporaneos-de-derecho-privado-web.pdf>

Woolcott, O. Monje, D. Peláez, R. Comandé, G. y Morales, R. (2018). La modernización de las instituciones del derecho civil. Responsabilidad civil, propiedad y contrato. Ed. Universidad Católica de Colombia. Bogotá. ISBN: 978-958-5456-56- p. 32. Recuperado de: <https://publicaciones.ucatolica.edu.co/pdf/la-modernizacion-de-las-instituciones-del-derecho-civil-cato.pdf>

Woolcott O. Vivas T. y Garzón T. (2017). El Problema de las transfusiones de sangre y la transmisión del VIH. Realidad y respuestas del derecho para la protección del paciente. Ed. Universidad Católica de Colombia. ISBN: 978-958-8934-65-5. Recuperado de: <https://repository.ucatolica.edu.co/bitstream/10983/15939/1/El-problema-de-las-transfusiones-de-sangre-y-la-transmisi%C3%B3n-del-VIH.pdf>